

C.A. de Santiago

Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y OÍDOS LOS INTERVINIENTES:

Se ha interpuesto recurso de nulidad, por el Defensor Penal Público don Mario Lira Nieto, en representación del sentenciado Feliciano Segundo Palma Matus, en contra de la sentencia dictada el 22 de octubre del año recién pasado por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de esta ciudad, la que condenó al acusado a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales, como autor de

- a) Una estafa consumada del artículo 467 inciso final del Código Penal, en relación a 18.250 acciones y dividendos de Gasco S.A.,
- b) Dos estafas frustradas del artículo 467 inciso final del citado código, relativo a 5 depósitos a plazo en moneda extranjera y, por el cobro en contra de Juan Datzira Sagalas,
- c) Una estafa frustrada del artículo 467 inciso final del mismo cuerpo normativo y uso malicioso de instrumento público en relación a 4 depósitos renovables en moneda nacional y UF en contra del Banco Santander, y
- d) Una estafa frustrada del artículo 467 N°1 del Código Penal y delito de uso malicioso de instrumento privado por el cobro fallido de una acreencia bancaria.

Funda su recurso en dos causales que interpone de forma conjunta la establecida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal, en relación con lo dispuesto en el artículo 297 del mismo cuerpo normativo y, a la vez interpone el motivo de impugnación contemplado en el artículo 373 b), esto es cuando



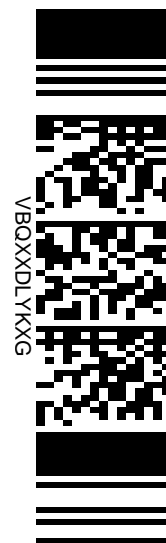
en la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

El recurso fue declarado admisible por resolución de esta Corte de diecisiete de noviembre del año 2022, y la vista del mismo se llevó a cabo el 27 de diciembre del año recién pasado.

Considerando:

1º) Que, el recurso en cuanto a la primera causal esto es la contemplada en el artículo 374 letra e) en relación con el artículo 297 todos del Código Procesal Penal, sostiene en síntesis, que si bien es cierto que los documentos mercantiles aludidos en la sentencia, no se encontraban incautados en el expediente de la quiebra tramitado en el Juzgado Civil, entiende que no se pudo corroborar que fueran acreencias imaginarias elaboradas por el acusado. Es así como se le exhibió tanto al tribunal como a los testigos copias simples de estos documentos, específicamente al Sr. Labarca Birke y Barrera Sancho, ambos abogados del Banco Santander, quienes no mantenían antecedentes dada la antigüedad de los mismos.

Señala que en relación a los hechos que afectarían al Banco Security, depuso en autos el testigo Alan Turner, funcionario de la institución bancaria, quien refirió haber recibido el oficio del Décimo tercer Juzgado Civil de Santiago, solicitando el pago de los instrumentos mercantiles, pago que en definitiva no fue realizado, toda vez que no se acompañaron los documentos originales. De igual forma, refiere en relación a Gasco S.A.,



quienes objetaron la solicitud de cobro expedida por el tribunal civil, en atención a que el documento de traspaso de acciones no se encontraba firmado por el vendedor, cosa que hicieron presente al tribunal, el cual insistió en definitiva al traspaso, siendo efectuado el mismo por la empresa aludida.

Luego explica que debe tenerse presente que todas las solicitudes realizadas son hechas mediante sede judicial; tal como se indica en la sentencia, se hacen aludiendo a un acta de incautación incorporada al expediente, respecto de la cual fue corroborada su falsedad; posteriormente se realizan otras sin aludir a acta alguna por parte de los solicitantes. No obstante, lo anterior, el tribunal dio por validez las pretensiones de los solicitantes ordenando los pagos a las instituciones afectadas.

Luego el recurso menciona el principio de la razón suficiente, incorpora el concepto y jurisprudencia sobre el mismo.

En cuanto a la segunda causal de nulidad interpuesta conjuntamente con la primera, señala que la sentencia condenó al encartado por el delito de uso malicioso de instrumento privado en concurso con el delito de estafa frustrada.

Sin embargo el delito de uso malicioso de instrumento privado absorbe el reproche del tipo de la estafa dado que este delito constituiría una estafa especial, cita jurisprudencia que avala su tesis.

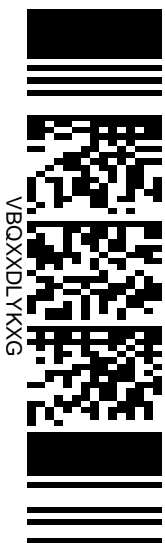
En suma solicita se acoja el recurso y pide por la primera causal de nulidad la nulidad del juicio y de la sentencia, debiendo



determinarse el estado en que habrá de quedar el proceso y la remisión de los antecedentes a tribunal no inhabilitado para la realización de un nuevo juicio oral, mientras que por la segunda causal solicita se enmiende parcialmente la sentencia.

2º) Que, como primera cuestión, relevante es destacar como tantas veces se ha señalado por esta Corte, que el presente arbitrio es un recurso extraordinario y de derecho estricto, naturaleza que obviamente implica el cumplimiento de requisitos que velan y atienden a que la impugnación se plantee y funde de forma lógica.

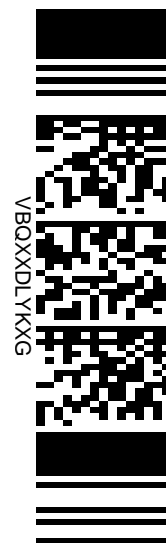
En este sentido desde luego el recurso, carece de esta lógica recursiva, por cuanto se han interpuesto dos causales que son contradictorias, no pueden interponerse conjuntamente, pues por el motivo de impugnación del artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c) en relación con el artículo 297 todos del Código Procesal Pena, se requiere que la sentencia haya dictado con infracción a las reglas de la sana crítica, además la parte que pretenda una revisión de este tipo debe satisfacer el imperativo de demostrar la vulneración de tales reglas. Por lo mismo, resulta indispensable que no sólo que las mencione o las defina, sino que debe explicar cómo y por qué se habrían vulnerado en el caso concreto, requisito que en este caso no se cumple. Y en este mismo sentido, quien invoca esta causal de nulidad, lo que en realidad pretende es una alteración del supuesto fáctico de la sentencia, precisamente por una infracción a las reglas de la sana crítica.



Pues bien, dicho lo anterior, mediante la infracción de derecho, el segundo motivo interpuesto por el recurso, lo que se hace, es la confrontación de la sentencia con la ley llamada a regular el caso, lo que supone la fidelidad a los hechos probados en la sentencia, pues lo que se ha de examinar es si las conclusiones fácticas encuadran en el supuesto legal respectivo. En definitiva para poder examinar el juzgamiento jurídico es menester que los hechos a partir de los cuales se estructura la impugnación se encuentren fijados en la sentencia – los que son inamovibles – pues sólo de cumplirse tal exigencia se podrá generar el debate sobre la infracción de ley que denuncia.

3º) Que, la deficiencia que presenta el recurso, resulta por sí sola suficiente para su rechazo, pues como ya se explicó atenta contra la lógica de la impugnación, pretender alterar los hechos y a la vez respetarlos y no querer alterarlos. Lo que se corrobora con las peticiones concretas que solicita a esta Corte, las cuales resultan absolutamente contradictorias, peticiones que son las que otorgan la competencia a estos sentenciadores. Tampoco se desarrolla ni se explica cómo la sentencia infringió el principio de la razón suficiente, y tratándose de la errónea aplicación del derecho no explica cuál es el artículo, norma o precepto del ordenamiento jurídico que se habría vulnerado por la **sentencia**.

4º) Que sin perjuicio de la indicado, el artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c) ambos del Código Procesal Penal, establece que la sentencia debe contener: “ La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y



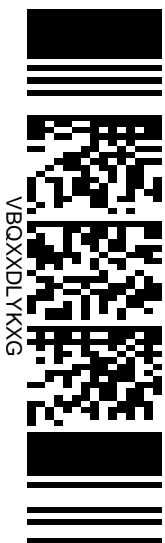
circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentan dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”.

A su turno el artículo 297 del mismo cuerpo normativo prescribe: “Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiera desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.

5º) Que, en relación a los preceptos legales transcritos, la motivación de la sentencia que nuestro ordenamiento procesal penal requiere, implica que debe contener una fundamentación completa y suficiente sobre la determinación de los hechos, ya que de lo contrario es imposible para el tribunal superior saber qué valoración se ha efectuado y sobre qué elementos de convicción, así como poder determinar si la misma se hizo cargo



de todos los elementos de convicción allegados y/ o se infringieron los principios de la lógica y/ o las máximas de la experiencia.

Que en este sentido se ha sostenido que la única forma de velar por el respeto de dichos límites es mediante la motivación de la sentencia, que supone el establecimiento de una base fáctica correctamente descrita.

6º) Que la sentencia cuya nulidad se pide, en sus considerandos quinto al octavo, se hace cargo en forma detallada y pormenoriza de toda la prueba allegada al proceso, y es en esa virtud que explica fundada y coherentemente el motivo de la decisión de condena; de esta forma no se divisa que se aparte del principio de la razón suficiente, desde que los argumentos de esta son plenamente coherentes y compatibles entre sí, y están dotados de motivación suficiente basada en el análisis de todos los antecedentes probatorios rendidos en el juicio.

7º) Que, se ha establecido, que en principio se ha de respetar la valoración de la prueba realizada por los jueces del fondo, siempre que esta no sea manifiestamente ilógica, absurda, irracional o que conculque principios generales del derecho, sin que esté permitido sustituir la lógica o la sana crítica del juzgador de la instancia por sobre el juicio hermenéutico y subjetivo de la parte, de modo que se requiere acreditar una equivocación clara, evidente y manifiesta en el juicio valorativo del órgano jurisdiccional para acoger el motivo de impugnación que se ha



interpuesto; lo que en la especie no ocurre; por lo que este motivo de invalidación será desestimado.

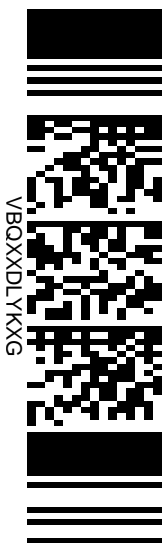
8º) Que, en cuanto a la segunda causal de nulidad que se interpuso conjuntamente con la primera, cabe tener en cuenta, que el recurso de nulidad por este motivo, se ha establecido para corregir un error de derecho y existirá este error cuando el mandato legal deba cumplirse de determinada manera y el juez por ignorancia, negligencia u otra circunstancia hace una aplicación equivocada de la norma que tiene un sentido claro y una aplicación indiscutible. Sin embargo como ya se señaló, el recurso no indica, ni menos explica cuál es la o las normas que entiende infringió la sentencia, tampoco como se produce la vulneración; deficiencia que impide a esta Corte hacer un mayor análisis.

9º) Que, por todo lo señalado el recurso de nulidad no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y, de conformidad con lo que disponen los artículos 372, 373, 374, 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría Penal Pública, en representación de Feliciano Segundo Palma Matus, en contra de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal De Juicio Oral En Lo Penal de esta ciudad el veintidós de octubre del año recién pasado, la que no es nula.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra Sra. Book.



Rol N° 5021 – 2022 Penal

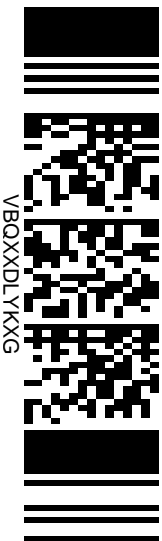


Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señor Alejandro Rivera Muñoz, señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor David Peralta Anabalón.

No firma el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R. y Abogado Integrante David Peralta A. Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

